

OPINION

do del Gobierno han apoyado decididamente la propuesta, con la sola excepción de Canarias y aceptando que Navarra es un caso absolutamente particular en el análisis. La presión institucional del poder ha prestado en ello una ayuda difícil de evaluar, pero nada desdeñable. Los resultados en Madrid sugieren también que ese aparato de poder, presionando sobre un gran número de funcionarios de la Administración central, obtiene resultados electorales apreciables.

Por otra parte ha funcionado la pulsión del voto *reflexivo* o del *miedo*, como ha dado en llamarse. Miedo, en definitiva, a provocar alguna consecuencia económica desconocida o una indeterminada desestabilización política. El Gobierno, hay que recordar, había definido como "una catástrofe" la eventual victoria del *no*. A todo ello se unía la duda sobre la posibilidad de que España abandonara la OTAN y de que la alternativa propuesta —vinculación bilateral con Estados Unidos— fuera a solventar la implicación en la política de bloques y satisfacer las aspiraciones de los pacifistas. Tales consideraciones han permitido, seguramente, a votantes socialistas no atlantistas dar su apoyo al *sí* sin graves problemas de conciencia, convencidos de que es posible hacer una labor europeísta en el seno de la Alianza y de que la ratificación popular de la desnuclearización supondrá una garantía añadida a lo ya establecido por las Cortes en ese sentido. No es improbable que, visto lo holgado de los resultados, algunos de estos votantes no se arrepientan ahora de haber cambiado su voto en sentido afirmativo.

Por último, han confluído en el *sí* sectores de la derecha asombrados de las llamadas a la abstención que hacía Coalición Popular y decepcionados por el silencio del centro-derecha; posiciones que se avenían mal con las negativas consecuencias económicas que, según habían proclamado medios financieros españoles, podrían deducirse de una victoria del voto negativo. Es difícil saber en qué número debe el triunfo el Gobierno a esta parte del electorado, pero no es arriesgado pensar, de acuerdo con los cálculos posibles sobre la abstención, que al menos entre 500.000 y un millón de votos conservadores o del centro-derecha han apoyado en esta circunstancia al Ejecutivo socialista. Con tales componentes es obvio que el *sí* se nutre en gran parte de un conjunto de frustraciones y de necesidades —independientemente de los atlantistas convencidos— y que ha generado una división en el interior de la derecha y una fractura en la conciencia de la izquierda. El Gobierno socialista detectará esta última herida entre sus propios militantes.

En los componentes del *no* puede hallarse una muestra completa de todo el electorado, parte del cual componía las abigarradas manifestaciones callejeras. Desde la extrema izquierda y nacionalismos radicales a la extrema derecha anticonstitucional, desde seguidores de Alianza Popular que desoyeron la consigna de la abstención hasta seguidores socialistas que han perseverado en la posición del partido antes del cambio gubernamental, han votado negativamente. Merece la pena destacar la influencia que en esa suma puede haber correspondido al notable crecimiento del censo, al que se han incorporado casi dos millones de jóvenes desde 1982 y en cuya masa es fácil presumir que se encuentren más arraigadas las ideas pacifistas. Dado lo exótico —políticamente hablando— de la composición de la plataforma para el *no*, es aventurado suponer que los comunistas van a rentabilizar definitivamente la diferencia de más de cinco millones de votos de esta opción respecto a sus resultados electorales en 1982. Los intentos de organizar una plataforma política unitaria a partir de esta que se llamaba *cívica* están condenados al fracaso. Hay que tener en cuenta, además, que un número indefinido, pero probablemente considerable, de antiguos abstencionistas por *pasotismo* ha concurrido esta vez a las urnas para combatir a la vez al Gobierno que pedía el *sí* y para no engrosar la abstención solicitada por Fraga.

La batalla de la abstención

La coalición conservadora clama pintorescamente por su triunfo aduciendo dos hechos que son ciertos: primero, que el referéndum ha registrado la participación más baja de todas las consultas de la transición democrática; segundo, que las abstenciones son, en números redondos, superiores en más de dos millones y medio a las papeletas del *sí*. Pero en el análisis del dato introduce dos elementos extraños y acomodaticios: por una parte se suma alegremente el porcentaje de abstención técnica al del seguimiento fraguista, interpretando ilícitamente el *no* ir a votar como una abstención activa; por otra, trata de apoderarse del

voto en blanco y nulo, sin que exista razón alguna para suponer que esto es posible.

Las llamadas de Fraga, Alzaga y Segurado fueron a la abstención, y sólo a la abstención. Contando con que la abstención técnica cubra un porcentaje mínimo del 15% del censo, eso significaría que más de cuatro millones de personas no han acudido a votar, sin que esa actitud pueda atribuirse a una identificación con Fraga. Pero si se contempla la asistencia a las urnas en los comicios de la última década es claro que, salvo en las generales de 1977 y de 1982, la abstención estuvo siempre por encima del 30% (cerca de nueve millones de votos). Puede sugerirse sin temores que esa hubiera sido la abstención plausible si Coalición Popular no hubiera hecho de ese gesto su campaña. De todas maneras, quedaría todavía un diferencial de 10 puntos, hasta el 40% de abstención, en el que puede definirse el seguimiento de la consigna abstencionista de los conservadores. Aunque es razonable atribuir una parte de la abstención a grupos provenientes de sectores ajenos a Fraga, y especialmente de la acarreada por afines a los partidos nacionalistas o de centro que propugnaron la libertad de conciencia, los cálculos arrojarían que entre dos millones y medio y tres millones de votos han sido fieles a la demanda de Fraga, absteniéndose de ir a votar. Lo que induce a suponer que, como los socialistas, los conservadores han perdido también más de dos millones de votos fieles respecto a las generales de 1982, papeletas que habrían ido al *sí*, al *no*, y sólo en alguna medida, al voto en blanco (1.121.206 votos). Es claro que ésta constituye una decisión cualificada y en absoluto asimilable con la abstención. En su suma debe encontrarse una proporción sustancial de quienes siguieron la postura inhibicionista del CDS o de Convergència i Unió y también sectores socialistas no atlantistas, pero tampoco dispuestos a poner al Gobierno en una situación límite.

Las autonomías

En la consulta volvió a quedar de manifiesto el hecho diferencial de las dos principales nacionalidades históricas, Euskadi y Cataluña, a las que se añade ahora el comportamiento peculiar de Canarias. La atipicidad de las dos primeras respecto al conjunto de España, que se está acentuando en los últimos años por la política autonómica del PSOE, es uno de los elementos más llamativos del resultado referendario.

Con el *no* vasco y catalán ha vuelto a quedar de manifiesto que las diferencias ni son artificiales ni se circunscriben a las clases políticas que gobiernan, respectivamente, desde Ajuria Enea, la plaza de Sant Jaume y la Moncloa. En el País Vasco parece que el pacto de legislatura no ha amortiguado las tensiones. La conciencia de incompreensión, el resquemor por viejos agravios, el temor a que el referéndum significara un respaldo global al conjunto de la política socialista y no sólo a su atlantismo, unido a la falta de sensibilidad que refleja el que a los 10 años de la muerte de Franco la Administración no tuviera prevista la utilización de la lengua de Euskadi para una consulta de este tipo, se ha traducido en un rechazo a la propuesta de Felipe González sobre política exterior. En Cataluña, la lectura de los resultados es todavía más compleja porque en ellos subyacen elementos heterogéneos, como la asfixia económica de la Generalitat, la crispación de Roca por desgastar al socialismo desde su *operación reformista* y una singular mala conciencia de la izquierda catalana —que se ha traducido en la tibieza y la falta de agresividad con que el PSC-PSOE ha defendido públicamente la permanencia en la OTAN.

Hay una paradoja a añadir. En ambas comunidades autónomas gobiernan partidos de derecha abiertamente atlantistas. Jordi Pujol es, desde hace muchos años, un auténtico propagandista de la OTAN. Pero todos y cada uno de los barrios de Barcelona, por ejemplo, desde los más residenciales a los periféricos, han registrado mayoría del *no*. Pese a la complejidad del tema de fondo y a la proclamada *libertad de voto* para sus seguidores, Convergència, con una campaña de mero guiño irónico a su electorado, ha conseguido una disciplina estruendosa para votar en contra de lo que siempre ha postulado, dejando tendido como único puente constructivo en dirección al Gobierno central la papeleta personal de Pujol. Algo parecido puede decirse de Euskadi, y la conclusión sería siempre la misma: Cataluña y el País Vasco quieren un trato y un encaje en el Estado diferente del que les está dando el PSOE.

En cuanto a Canarias, cabe atribuir la ventaja del *no* a la situación geopolítica de las islas y su diferente implicación en las consecuencias que se derivan de participar en la Alianza Atlántica.

La resaca del referéndum

LAS BOLSAS españolas experimentaron ayer un salto espectacular, en cuyo significado resulta innegable la influencia del resultado del referéndum. La plasticidad de esas subidas récord aclara la relación que existía entre las perspectivas económicas y la decisión política que se ha dirimido. Pero esas noticias no deben servir para eliminar un cierto aire de frustración entre sectores votantes del *sí*, que no quisieran se interprete la permanencia en la OTAN como un apoyo a la política de bloques.

Los líderes occidentales coinciden en el alivio que en las expectativas internacionales procura el triunfo del Gobierno español. De ese alivio, obviamente, participa Felipe González, que, evitando la inclinación a celebrar con exceso la victoria, ha lanzado un llamamiento al consenso en política exterior y ha prometido dirigir sus esfuerzos en favor de la paz y la distensión mundial. Vaya por delante el reconocimiento al buen juicio de su reacción, que contrasta con los excesos verbales de algunos de los perdedores de la consulta (abstencionistas y sectores de la plataforma del *no*), dispuestos a atribuirse la condición de vencedores morales. La invocación a la moralidad y sus diferentes versiones es algo ya manido en el proteico escenario que hemos vivido las últimas semanas. Lo que procede ahora, una vez que se ha remansado el ambiente, es hacer un análisis político del comportamiento del voto en todas y cada una de sus expresiones conocidas.

Por la estabilidad

Casi no cabe duda de que el Gobierno debe la victoria del *sí* mayormente a sectores de su propio electorado, con adherencias más que ocasionales del centro-derecha y de la derecha. Un análisis detenido del voto indica que el partido socialista ha perdido más de un millón de sufragios (1.125.000) respecto a las elecciones de 1982, pero probablemente son más aún los socialistas que dieron su papeleta al *no*; la fuga de éstos habría sido compensada en parte por el voto de conservadores dispuestos a apoyar en esta ocasión a Felipe González en su opción de permanecer en la Alianza.

En las papeletas afirmativas han confluído, pues, diversas corrientes que han facilitado el triunfo. El aparato del partido ha funcionado de manera extraordinaria —salvo en Cataluña, donde se aprecian diferencias notables con el resto—. Pero este aparato no habría sido tan eficaz si no hubiera contado además con el apoyo de las estructuras de poder político que dominan los socialistas. No es casual que en Andalucía y Castilla-La Mancha los porcentajes del *sí* hayan sido tan elevados, y que la Comunidad Valenciana haya obtenido altos índices de participación. En su conjunto, las comunidades autónomas regidas por el parti-